

Bogotá, D.C.

Doctora
AMPARO YANETH CALDERON PERDOMO
Secretaria
Comisión Primera Constitucional Permanente
Cámara de Representantes
debatescomisionprimera@camara.gov.co
Ciudad

Asunto: Respuesta Proposición No. 8 – H. Representante Luis Albán

Referencia: Radicado 2023-1-004044-057817 Id: 179308

Respetada Secretaria,

En atención a la proposición No. 8, suscrita por el Honorable Representante Luis Alberto Alban Urbano, mediante la cual se cita a debate de control político sobre las garantías de seguridad para firmantes de paz, líderes y lideresas sociales en el marco de la paz total, me permito, de conformidad con las competencias del Ministerio del Interior y de acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Derechos Humanos y la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno, dar respuesta al requerimiento, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la citación, de conformidad con el artículo 249 de la ley 5a de 1992, en los siguientes términos:

➤ ***En el marco de lo establecido en el Decreto 1066 de 2015***

1. ¿Qué acciones ha desarrollado el Ministerio del Interior para impulsar y dar asistencia técnica a las entidades territoriales en la formulación de los Planes Integrales de Prevención?

De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Derechos Humanos, el equipo de Gestión Preventiva del Riesgo – GPR, por capacidad técnica, administrativa y financiera, focalizó 25 departamentos y 220 municipios, donde desarrolló las siguientes actividades en la vigencia 2024:

- Incidencia en los Planes de Desarrollo para incluir las líneas relacionadas con el Enfoque basado en Derechos Humanos - EBDH y la Política Pública de Prevención (Decreto 1581 de 2017), así como la Política Pública de Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización (Decreto 1444 de 2022).

Igualmente, el GPR incidió en políticas tales como: i) instalación y funcionamiento de las Mesas de Garantías; ii) Atención y protección a casos de riesgo de periodistas; iii) Programa de Protección Colectiva; iv) Implementación del Programa de Seguridad para comunidades y organizaciones - Decreto 660 de 2018; v) Implementación del Programa PIG Mujeres; vi) Preservación y cuidado de cementerios; vii) Búsqueda humanitaria de personas dadas por desaparecidas; viii) Garantía al derecho de reunión y la manifestación pública y a la protesta social; ix) Fortalecimiento institucional en materia de Derechos Humanos; x) Liderazgos del colectivo LGBTI, y xi) Acciones de Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización.

- Se tuvo incidencia en las entidades territoriales para que se tuvieran en cuenta otros instrumentos como: el Plan Integral de Prevención, como máximo instrumento de planeación en el territorio en la implementación de la Política Pública de Prevención; Plan de contingencia; Planes de acción contra MAP; Plan de Acción Territorial – PAT; y Rutas para la prevención de violaciones a los derechos a la vida. Se resalta que dichas acciones fueron claves en la formulación de los Planes de Desarrollo para las entidades territoriales.

- Se elaboró una circular y la caja de herramientas para formular los Planes Integrales de Prevención, la cual fue presentada y distribuida en el 100% de las entidades territoriales del país.

- En los meses de mayo y junio se brindó asistencia técnica de manera virtual a todas las entidades territoriales, facilitando la metodología de construcción de Planes Integrales de Prevención.

- En los meses de junio y julio se realizó acompañamiento en la Construcción de los Planes Integrales de Prevención a violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario - DIH, en las siguientes entidades territoriales: Cauca y sus 42 municipios, Córdoba y sus 32 municipios, Valle del Cauca y sus 42 municipios; igualmente en El Tarra, El Carmen y Ocaña en Norte de Santander; Chalan, ovejas y Coloso en Sucre; Soledad – Atlántico, Cauca departamental, Argelia, Patía, Piendamó, Inzá en Cauca; San Marcos, La Unión y Granada en Sucre; Valledupar, Copey y Agustín Codazzi en Cesar; Orocué, Aguazul, San Luis de Palenque en Casanare; Tolima departamental; Villa Garzón en Putumayo; San José de Fragua, Florencia, Montañita, Doncello, San Vicente del Caguán en Caquetá; Córdoba departamental, Pueblo Nuevo, Montelíbano en Córdoba; Istmina y Medio San Juan, Acandí, Unguía, Riosucio, Carmen del Darién y Belén de Bajira en Chocó; y Milán en Caquetá.

De igual forma, a partir de los planes de prevención se identificaron riesgos contra los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de personas, grupos y comunidades. Teniendo en cuenta lo anterior y atendiendo a los principios de colaboración armónica, complementariedad, concurrencia, subsidiariedad, coordinación y corresponsabilidad institucional, las autoridades territoriales contarán con el apoyo de las

entidades del orden nacional con competencia en la elaboración e implementación de los Planes Integrales de Prevención.

Por lo anterior, los Planes Integrales de Prevención se definen, validan y legitiman con la participación de las autoridades territoriales, representantes de la sociedad civil, autoridades étnicas, las víctimas, población migrante víctima del conflicto armado, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas, firmantes del acuerdo de paz, miembros de Juntas de Acción Comunal, la fuerza pública y demás actores encargados de establecer el marco de actuación en materia de prevención.

2. ¿Qué acciones ha desarrollado el componente de promotores/as Comunitarios de paz y convivencia?

Según la información suministrada por la Dirección de Derechos Humanos, se precisa que el componente de promotores y promotoras comunitarios de paz y convivencia se encuentra consagrado en el componente 2 del Programa Integral de seguridad y protección para comunidades y organizaciones en los territorios, reglamentado por el Decreto 660 del 17 de abril de 2018 en su artículo 2.4.1.7.3.4.

Así pues, de acuerdo con los registros de acciones adelantadas entre 2018 y 2022, en clave de la implementación de este componente, el Ministerio del Interior, por conducto de la Dirección de Derechos Humanos, priorizó los siguientes departamentos: Putumayo, Cauca, Córdoba, Norte de Santander, Bolívar, Nariño, Huila, Meta y Cauca, logrando la capacitación y acreditación de 89 Personas, lo cual se ve reflejado en las Resoluciones Resolución 0968 del 31 de mayo de 2022 (*Anexo 1*) y 1746 del 21 de septiembre de 2022 (*Anexo 2*).

Se resalta, respecto a la implementación de este componente, que desde el comienzo del gobierno del señor Presidente Gustavo Petro se replanteó la dinámica de implementación del programa, considerando que debe darse de manera integral, de tal manera que todos los componentes estén articulados y no de manera aislada. En consecuencia, el primer paso es la formulación de los Planes Integrales de Prevención a violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Este Plan Integral de Prevención – PIP responde a la materialización del componente de medidas integrales de prevención, seguridad y protección. Así pues, en el marco de este ejercicio, a la fecha se han formulado 60 PIP, en los cuales las comunidades y organizaciones priorizadas postulan a dos de sus integrantes como posibles promotoras y promotores de paz, quienes los representarán en la implementación del componente.

De igual manera, durante el año 2023, se realizaron 15 capacitaciones dirigidas a comunidades y organizaciones priorizadas en los departamentos de Cauca, Huila, Norte de Santander, Córdoba, Tolima, Sucre y Antioquia.

Cabe mencionar que en los próximos meses se espera poder materializar la firma de un convenio con una entidad de educación superior de carácter público, con el fin de desarrollar un diplomado que permita brindar capacitación a promotores y promotoras comunitarios. Se estima que con esta iniciativa se puede avanzar con alrededor de 400

personas. De igual forma, desde este Ministerio se invitará al Ministerio de Justicia para avanzar en el análisis de las resoluciones y la definición de acciones encaminadas a la implementación del componente.

3. ¿Qué acciones de promoción a los planes integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) ha desarrollado el Ministerio del Interior?

A partir de la información suministrada por la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana y Gobierno y de acuerdo con lo señalado en el Decreto 1066 de 2015, se ha diseñado la siguiente metodología para brindar asesoría y asistencia técnica permanente a las autoridades territoriales en el diseño, formulación e implementación de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a saber: Fase I. Diagnóstico y formulación de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana y Fase II. Implementación, seguimiento y evaluación de Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana en adelante -PISCC.

FASE I

DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (1 DE ENERO DE 2024 A 30 DE JUNIO DE 2024)

DIAGNÓSTICO

- El PISCC es realizado, formulado y aprobado en los primeros seis meses de mandato de las nuevas administraciones locales (Arts. 201 y 205 de la Ley 1801 de 2016 – Art. 41 de la Ley 2197 de 2022) conforme al marco Normativo y Políticas públicas de la gestión integral de la seguridad y convivencia ciudadana.

FORMULACIÓN

- Se implementan las estrategias de seguimiento y evaluación de los PISCC, que comprende: **i.** Instancias de coordinación para la gestión de la seguridad y convivencia ciudadana; **ii** Funciones de Comité Territorial de Orden Público; **iii.** Funciones y asistencia técnica en Fondos Territoriales de Seguridad – FONSET; y **iv.** Gestión de los Fondos Territoriales de Seguridad, relacionado con el manejo de los recursos, destinación de los mismos y aprobación.

Es importante señalar que con estos proyectos se accede a oportunidades financieras y operativas para implementar estrategias en planes, programas y proyectos, en materia de seguridad y convivencia ciudadana, los cuales son formulados en estricto cumplimiento de los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación – DNP: Coordinación, Articulación, Seguimiento y Evaluación.

En esta primera fase de diagnóstico y formulación de los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, hemos apoyado a las entidades territoriales y entidades de nivel nacional, en la articulación permanente institucional para la implementación de los PISCC.

FASE II

IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (30 DE JUNIO DE 2024 Y SIGUIENTES)

En esta fase de seguimiento, las entidades territoriales que presentaron los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana serán apoyados de manera articulada por la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior, conforme a los siguientes lineamientos:

1. Articulación con Procuraduría General de la Nación para dar a conocer la circular sobre la presentación de los PISCC ante el Ministerio del Interior y el Departamento Nacional de Planeación.
2. Se hace un corte al 31 julio de 2024 para determinar cuántos PISCC son enviados por las Alcaldías y Gobernaciones en coordinación con el DNP.
3. Se está trabajando, en articulación con el DNP y la Policía Nacional, para elaborar un borrador de Circular Nacional para instar a las entidades territoriales a presentar los PISCC (con documentos soporte como: acta de aprobación del Comité Territorial de orden público y Plan Operativo Anual de Inversión).
4. Se tiene previsto, para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, realizar una fase de identificación que permita determinar cuáles entidades territoriales priorizaron en el PISCC problemáticas de convivencia (conflictos entre vecinos por el ruido, manejo de basuras, manejo de animales declarados como peligrosos, violencia intrafamiliar y violencia de género).
5. Se hará seguimiento a los recursos destinados por las entidades territoriales para estrategias de convivencia, a través del equipo FONSET.

6. Se brindará asistencia técnica en la implementación de los PISCC de acuerdo con las fuentes de financiación (FONSET), metodología de seguimiento implementada por las entidades territoriales y el proceso de actualización.

7. Acompañamiento y priorización de las capacitaciones anteriormente mencionadas en los 170 municipios PDET, 16 subregiones. De esta manera, en cumplimiento al marco legal vigente, el Ministerio del Interior, por conducto de la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno, realiza permanente seguimiento a los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia - PISCC en los municipios PDET.

Por otra parte, el Ministerio del Interior, en ejercicio de sus funciones como Presidente de la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol (CNSSCF), y en cumplimiento de la Ley 1270 de 2009, propició la estrategia "*Futbolízate y vívelo en Paz: Pacto por el fútbol y el respeto a la vida*", a través de la cual se hace énfasis en la importancia de la corresponsabilidad entre el Gobierno Nacional, los gobiernos locales, los clubes, los hinchas, los futbolistas y los entes de control.

La estrategia tiene como objetivo promover la fiesta del fútbol como espacio de vida, convivencia, diálogo y unión intergeneracional, a través de la integración, cohesión, equidad y no discriminación en el marco de la seguridad humana, así como generar espacios de participación y diálogo social para garantizar la libertad, la dignidad y el vivir sin miedo en los entornos y dinámicas asociadas al fútbol en Colombia.

➤ ***En el marco de las funciones establecidas en el artículo 11 del Decreto 2124 de 2017***

1. ¿Cuántas situaciones de riesgos y amenazas contra líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y personas y colectivos en proceso de reincorporación se han reportado durante el 2023? Desglosar por tipo de riesgo y amenaza, género, año, municipio y número de personas afectadas.

Desde este Ministerio se aclara que la información solicitada no reposa en esta cartera. Entendiendo la importancia de dar respuesta al interrogante planteado, este Ministerio realizó traslado por competencia a la Cartera de Defensa Nacional, a través de oficio con radicado No. 2023-2-003201-038617, y a la Unidad Nacional de Protección –UNP–, a través de oficio con radicado No. 2023-2-003201-038571, para que se brinde respuesta de fondo.

Asimismo, el Ministerio del Interior reitera su compromiso con el seguimiento de alertas tempranas que dan cuenta de situaciones de vulneración de derechos humanos. Es así que, de acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana y Gobierno, se precisa que es a través del Decreto 2124 de 2017

que se reglamenta el Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida¹ frente a la presencia, acciones y/o actividades de las organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan en riesgo los derechos de la población y la implementación del Acuerdo Final.

En virtud del aludido Decreto, se establece que la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida - CIPRAT² es la encargada de articular las acciones de prevención, atención y seguimiento a las situaciones de riesgo enunciadas en las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.

La Secretaría Técnica de la CIPRAT, en cabeza del Ministerio del Interior, cumple la función de recopilar, procesar, analizar, recomendar, articular y hacer seguimiento a dichas alertas tempranas, teniendo en cuenta, a su vez, las informaciones recibidas por múltiples fuentes.

De esta manera, en el marco del procedimiento establecido para dar cumplimiento a dicha función, el aludido Decreto prevé que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la emisión de la Alerta Temprana se realiza seguimiento a las medidas adoptadas para coordinar las medidas complementarias necesarias de acuerdo con cada situación, las cuales son comunicadas en los diez (10) días hábiles siguientes por la Secretaría Técnica (Ministerio del Interior)³.

Así mismo, la normativa contempla un segundo momento que corresponde al término de nueve (9) meses para realizar la evaluación periódica de las gestiones y acciones que cada entidad pertinente ha realizado como respuesta institucional a las situaciones de riesgo advertidas. De esta forma, el Ministerio del Interior convoca a sesión de seguimiento en terreno y/o a través de videoconferencia.

Dicho lo anterior, para los años 2022 – 2023, se han atendido las siguientes Alertas Tempranas, donde se identifican riesgos a líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y personas y colectivos en proceso de reincorporación:

¹El Sistema está compuesto por: (i) Alerta Temprana, emitida de manera autónoma por la Defensoría del Pueblo; (ii) Respuesta Rápida, que realiza la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida en conjunto; y (iii) Seguimiento al avance en la implementación de las recomendaciones.

²Se encuentra conformada por las siguientes entidades del orden nacional: (i) Ministerio del Interior, (ii) Ministerio de Defensa, (iii) Policía Nacional, (iv) Comando General de las Fuerzas Militares, (v) Unidad Nacional de Protección (UNP) y (vi) Unidad para las Víctimas (UARIV) con carácter permanente.

³ Primer momento: (i) La Alerta Temprana se recibe mediante correo electrónico: secretariaciprat@mininterior.gov.co; (ii) la Secretaría Técnica remite de manera inmediata la Alerta Temprana, vía correo electrónico, a las entidades territoriales y nacionales competentes identificados por la situación de riesgo, gestionando los peligros y la coordinación interinstitucional pertinente; (iii) se verifica si en la Alerta Temprana se encuentran municipios priorizados en Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en caso positivo, se le informa a la autoridad territorial, la necesidad de crear el Comité Territorial de Alertas para la Reacción Rápida, brindando asesoría técnica sobre su conformación; (iv) Luego, dentro de los siguientes diez (10) días calendario siguientes, se convoca a sesión de seguimiento en el territorio que tiene la situación de riesgo; (v) resultado de esta, la Secretaría Técnica elabora y entrega el acta de la sesión, en donde se consignan las recomendaciones ajustadas a las acciones adelantadas en el marco del seguimiento a la situación de riesgo identificada; finalmente, (vi) se sistematiza en la matriz de seguimiento todas las recomendaciones emitidas.

No.	Alerta Temprana	Departamento	Municipios	Fecha emisión
1	AT 001-22	Valle	Cali	01/01/2022
2	AT 002-22	Putumayo	Puerto Leguizamo	25/01/2022
3	AT 005-22 D.C.	Bogotá	Bogotá	24/02/2022
		Cundinamarca	Granada	
			Silvania	
			Fusagasugá	
			Viotá	
			Tibacuy	
			Pasca	
			Arbeláez	
			Pandi	
			San Bernardo	
			Venecia	
			Cabrera	
		Tolima	Icononzo	
4	AT 011-22	Caquetá	La Montañita	02/05/2022
			Solano	
			Cartagena del Chairá	
			Paujil	
5	AT 016-22	Tolima	Planadas	30/06/2022
			Ataco	
			Chaparral	
			Rioblanco	
6	AT 020-22	Cauca	Almaguer	18/08/2022
			Bolívar	
			Sucre	
7	AT 023-22	Antioquia	Amalfi	02/09/2022
			Anorí	
			Remedios	
			Segovia	
			Vegachí	
8	AT 024-22	Vaupés	Mitú	06/09/2022
			Carurú	
9	AT 025-22	Huila	Nátaga	12/09/2022
			La Plata	
			Paicol	
10	AT 029-22	Atlántico	Baranoa	27/10/2022
			Palonuevo	
			Luruaco	
			Sabanalarga	
			Repelón	
11	AT 030-22	Nariño	Barbacoas	15/11/2022
			Magüi Payán	
			Roberto Payán	
12	AT 031-22	Nariño	Santa Bárbara de Iscuandé	29/11/2022
13	AT 033-22	Bolívar	Carmen de Bolívar	06/12/2022
			Marialabaja	
			San Juan Nepomuceno	
			San Jacinto	
			Córdoba	
			El Guamo	
			Zambrano	
		Sucre	Ovejas	
			Chalán	
			Colosó	
			Morroa	
			Los Palmitos	
			San Onofre	
			San Antonio de Palmito	
			Tolúviejo	

14	AT 005-23	Cauca	Toribio	22/02/2023
15	AT 007-23	Cauca	Cajibío	02/03/2023
16	AT 008-23	Cauca	Piamonte	07/03/2023
		Nariño	Ricaurte	
			Barbacoas	
			Tumaco	
			Ipiales	
			Cumbal	
		Putumayo	Orito	
			Puerto Caicedo	
			Villagarzón	
			Valle del Guamuez	
			San Miguel	
			Puerto Asís	
17	AT 009-23	Norte de Santander	Bucarasica	09/03/2023
			Sardinata	
			El Zulia	
18	AT 010-23	Huila	Neiva	13/03/2023
			Tello	
			Baraya	
		Arauca	Arauquita	30/03/2023
			Fortul	
			Saravena	
			Tame	
19	AT 011-23			
20	AT 013-23	Chocó	Bagadó	03/04/2023
21	AT 018-23	Caquetá	San Vicente del Caguán	18/05/2023
22	AT 020-23	Chocó	Rio Iró	29/05/2023
		Casanare	Aguazul	15/06/2023
23	AT 023-23		Yopal	
62	AT 026-23	Norte de Santander	Abrego	29/06/2023
63	AT 028-23	Santander	Rionegro	23/08/2023
64	AT 029-23	Caquetá	Puerto Rico	23/08/2023
		Cauca	Corinto	30/08/2023
	AT 031-23		Miranda	
		Valle	Pradera	
24			Florida	
		Bolívar	Arenal	28/09/2023
			Cantagallo	
			Morales	
			San Pablo	
			Santa Rosa del Sur	
25	AT 034-23		Simití	
26	AT 039-23	Valle del Cauca	Buenaventura	05/12/2023

Fuente: Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana y Gobierno

2. ¿Qué tipo de medidas preventivas y de reacción rápida se han coordinado e impulsado por riesgos y amenazas contra líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y personas y colectivos en proceso de reincorporación durante el 2023? Desglosar por tipo de medida preventiva, género, año, municipio y número de personas afectadas.

Para efectos de responder al interrogante, se relacionan las acciones destinadas a la protección de líderes y lideresas, defensoras de derechos humanos y personas y colectivos en proceso de reincorporación, así:

A. PLAN DE EMERGENCIA PARA LA PROTECCIÓN DE LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES

En agosto de 2022, el Gobierno Nacional adoptó el *Plan de emergencia para la protección de Líderes y Lideresas Sociales, personas Defensoras de DD.HH y Firmantes de Paz* y en concordancia con la circular externa con fecha del 03 de septiembre 2022 sobre las *"Facultades con las que cuenta Alcaldes y Gobernadores para requerir el auxilio, articulación y acompañamiento de las Fuerzas Armadas y de Policía en los Puestos de Mando Unificados por la Vida en aras de brindar protección a líderes/as sociales, defensores/as de derechos humanos y firmantes del acuerdo de paz"*, emitida por los Ministerios del Interior y de Defensa, adelantó la conformación de Puestos de Mando Unificado por la Vida -PMUV- cuyo fin era mantener rutas efectivas para la prevención y protección de graves violaciones de derechos humanos en contra de líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos.

El Plan de Emergencia, con una vigencia de 100 días, constaba de 49 medidas a ser desarrolladas en el corto plazo (100 días), mediano plazo (6 meses) y largo plazo (1 año).

A continuación, se presenta una relación de los PMUV realizados, así como el estado general del Plan de Emergencia:

1. Información general PMUV Departamento de Antioquia

- Entre agosto y diciembre del 2022 sesionaron 18 Puestos de Mando Unificados por la vida en el departamento de Antioquia.
- Los municipios donde se llevaron a cabo fueron: Ituango (3); Murindó (2); Remedios (2); Caucasia (1); Sonsón (1); Yondó (1); Puerto Berrio (1); Carmen de Viboral (1); Medellín (2); Andes (1) y las subregiones del Nordeste Antioqueño (1); Bajo Cauca (1); y Oriente Antioqueño (1).

1.2 Información general PMUV Departamento de Arauca

- Entre agosto y diciembre del 2022 sesionaron 9 Puestos de Mando Unificados por la vida en el departamento de Arauca.
- Los municipios donde se llevaron a cabo fueron: Arauquita (2); Arauca (1); Saravena (2); Tame (3); Fortul (1).

1.3 Información general PMUV Departamento de Caquetá

- Entre septiembre y noviembre del 2022 sesionaron 11 Puestos de Mando Unificados por la vida en el departamento de Caquetá.

- Los municipios donde se llevaron a cabo fueron: San Vicente del Caguán (4); Cartagena de Chairá (3); Montañita (3); y departamental (1).

1.4 Información general PMUV Departamento del Cauca

- Entre agosto y diciembre del 2022 sesionaron 10 Puestos de Mando Unificados por la vida en el departamento del Cauca.
- Los municipios donde se llevaron a cabo fueron: Argelia (1); Patía (1); Caldono (1); Santander de Quilichao (1) y departamental (6).

1.5 Información general PMUV Departamento de Chocó

- Entre septiembre y diciembre del 2022 sesionaron 2 Puestos de Mando Unificados por la vida en el departamento de Chocó.
- Los municipios donde se llevaron a cabo fueron: Alto Baudó (1) y a nivel departamental (1)

1.6 Información general PMUV Departamento de Córdoba

- Entre septiembre y diciembre del 2022 sesionaron 4 Puestos de Mando Unificados por la vida en el departamento de Córdoba.
- Los municipios donde se llevaron a cabo fueron: Tierralta (1) y departamentales (3)

1.7 Información general PMUV Departamento de Huila

- Entre septiembre y noviembre del 2022 sesionaron 3 Puestos de Mando Unificados por la vida en el departamento del Huila.
- Los tres PMUV registrados fueron departamentales.

1.8 Información general PMUV Departamento de Meta

- Entre octubre de 2022 y marzo del 2023 sesionaron 2 Puestos de Mando Unificados por la vida en el departamento del Meta.
- Los municipios donde se llevaron a cabo fueron: La Uribe (1) y Mesetas (1)

Teniendo en cuenta que los PMUV eran una medida de las 49 contempladas en el Plan de Emergencia y que los plazos de funcionamiento, tanto de los PMUV (100 días) como del Plan de Emergencia, han finalizado (1 año), a continuación, se informará sobre los avances de cada uno de los ejes del Plan de Emergencia relacionados con sus ejes, a saber:

Eje 1 - Generación de confianza institucional y prevención de la estigmatización.

Eje 2 - Medidas de justicia y contra la impunidad.

Eje 3 - Acción preventiva y estratégica de la Fuerza Pública en terreno

Eje 4 - Presencia territorial del Estado y acompañamiento de la comunidad internacional.

Eje 5 - Gestión del riesgo y acciones humanitarias.

Eje 6 - Medidas administrativas para la seguridad territorial.

Este informe permite concluir que hubo un cumplimiento general del Plan de Emergencia y que sus finalidades fueron alcanzadas. Por una parte, se disminuyeron los índices de violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y firmantes de paz y, por otra, se reinstalaron y abrieron los espacios de discusión de las diferentes políticas públicas en materia de derechos humanos, garantías e implementación del Acuerdo Final de Paz. A continuación, se describen los ejes del Plan de Emergencia, así como el balance de su implementación:

Balance de implementación - Plan de Emergencia

Objetivo del plan: adoptado desde el inicio del Gobierno tenía el propósito de disminuir de manera significativa las agresiones a personas defensoras de derechos humanos, de suerte que pudieran brindarse garantías para la participación en la discusión de las políticas públicas en la materia.

Estructura: el plan posee seis ejes con 49 acciones de implementación, a saber:

EJE	Resumen medidas	Notas sobre el cumplimiento
1. Generación de confianza institucional y prevención de la estigmatización	<p>1. Derogación de normativas que sustituyan el AFP y promulgación de decretos para su desarrollo</p> <p>2. Instalación de diversas instancias y programas de interlocución y del Acuerdo Final de Paz (AFP),</p>	<p>La mayoría de instrumentos normativos a ser adoptados se adoptaron o están en proceso (caso PESP, ITPS) e igualmente se derogaron varios de los solicitados (caso UNP). Faltó derogar el PAO y el CONPES de garantías, pero por decisión política no se han aplicado y se está adelantado el proceso de la política pública de DDHH para la Paz Total (109 PND), la cual se compone de la política pública de garantías para el liderazgo social, la reforma al modelo de protección y la racionalización de la política de prevención. Todas en avance.</p> <p>El 90% de las instancias descritas se han reactivado (IAN, CNGS, CSIVI, MTSP). Faltaba la MNG, pero se han venido reactivando las MTG desde el 2023 y se tiene previsto un cronograma para 2024. De los 21 procesos, 12 están instalados y en funcionamiento, y 8 se instalarán prontamente. La proyección es ampliar el</p>

		<p>funcionamiento activo a 36 territorios (los 32 departamentos más tres procesos regionales y la mesa distrital de Bogotá). Para ello se están realizando los acercamientos necesarios. En adición, se presentará propuesta de formalización del Proceso Nacional de Garantías.</p> <p>También se reactivaron programas vitales como el Decreto 660 y el Programa de Garantías para Lideresas. Frente al primero se han seleccionado 140 comunidades de todo el país. De estas se ejecutarán en este primer semestre 54 iniciativas equivalentes a más de 3 mil millones. A final de 2024 se habrán formulado 65 nuevos PIP y 36 protocolos. Respecto al segundo se tiene un Plan de Acción ya finalizado (proceso participativo con más de 500 lideresas) que se presentará en su Comisión Intersectorial y se ampliará su territorialización de 10 a 20 departamentos en este año. Se está produciendo el decreto de formalización de este Programa.</p> <p>Cabe notar la expedición de la Directiva Presidencial de reconocimiento a la labor de defensores/as según se solicitó en el plan y la continua realización de actos de reconocimiento a la labor de defensores/as.</p>
2. Medidas de justicia y contra la impunidad	Despliegue del trabajo investigativo de la FGN y fortalecimiento de juzgados y casas de justicia.	<p>Las medidas referidas a la FGN dependen de ella, no del Gobierno Nacional. En el periodo anterior la articulación con la Fiscalía fue un reto y en algunos casos, un obstáculo. Se espera avanzar en este contexto.</p> <p>En cuanto a Minjusticia, se avanzó en la creación de juzgados penales de circuito para casos vinculados a delitos contra defensores/as y se integró en la Política Criminal una línea dirigida a su fortalecimiento. No se conoce si se fortalecieron casas de justicia.</p> <p>No se adelantó proyecto de ley sobre reforma al principio de oportunidad y matriz de colaboración.</p>
3. Acción preventiva y estratégica de la Fuerza Pública en terreno	Transformación de la acción de la Fuerza Pública	<p>Entre varias acciones, se fortaleció la UNIPeP y su cobertura territorial, de igual forma el Cuerpo élite que surgen del Acuerdo Final de Paz.</p> <p>Fruto del plan de emergencia se generó la discusión y desarrollo de un modelo de protección adecuado para las AETCR, las NAR y la población firmante. Es de notar que 15 AETCR fueron priorizados en el Decreto 660.</p> <p>Se ha adelantado el traslado de AETCR con garantías de seguridad y dignidad humana.</p>

		<p>Se resalta la suspensión de los operativos de erradicación forzada y expedición de una política de drogas que transforma el enfoque punitivista. Igualmente, el enfoque de la Fuerza Pública ha venido cambiando para dirigirse a la interdicción.</p> <p>No obstante, hay una necesidad de impulsar transformaciones más profundas en el accionar de la Fuerza Pública, especialmente en materia del proceso de transformación policial.</p> <p>Hubo obstáculos en cuanto a la transformación de los indicadores de medición de garantías de seguridad y en relación con la depuración de datos de archivo e inteligencia. No se desarrollaron acciones para esto.</p>
4. Presencia territorial del Estado y acompañamiento de comunidad internacional	<p>Estrategia de los PMUV</p> <p>Misiones de verificación</p> <p>Actuación rápida, cualificada y en territorio de la UNP</p>	<p>Hasta septiembre de 2023 se realizaron 253 PMUV. La estrategia en la actualidad no posee el mismo uso, se emplea para la coordinación interinstitucional en situaciones de emergencia o coyunturales. Esto permitió la coordinación institucional para el desarrollo de varias acciones al nivel territorial. Deben reconocerse obstáculos en materia de coordinación y seguimiento a los compromisos en cada espacio.</p> <p>Durante el año 2023 se realizaron 9 misiones de verificación en el Cauca, 8 en el marco de la Mesa del Norte del Cauca, 1 en Jambaló y Caldono, a efectos de distensionar el conflicto de tierras en esta región. En el 2024, se han realizado misiones en el Sur de Bolívar y Bahía Málaga.</p> <p>Con relación al chat de reacción inmediata, se estableció, por el Ministerio del Interior, una matriz de seguimiento y se generó un equipo de acciones urgentes para atender casos de defensores en riesgo.</p> <p>Respecto a los CERREM, más allá del número realizado o trámites presentados, debe resaltarse el proceso actual de transformación del modelo de protección que buscará superar la visión individual hacia lo colectivo. Este ya en avance para revisión de propuesta de reforma.</p> <p>Se reiteran comentarios sobre el Decreto 660. Se resalta que es en este gobierno en que se diseñaron todas sus herramientas de funcionamiento. Se destaca, igualmente, que ha funcionado su Comité Técnico y se implementarán finalmente iniciativas.</p>

		Ha habido un funcionamiento regular de las CIPRAT y se ha venido realizando un proceso de articulación entre la Dirección de Derechos Humanos y la Dirección de Seguridad Ciudadana para la transformación en su metodología de funcionamiento. Sin embargo, aún persisten fallas en cuanto al seguimiento.
5. Gestión del riesgo y acciones humanitarias	<p>Reubicación temporal de personas en riesgo</p> <p>Reconocimiento iniciativas humanitarias</p> <p>Falencias en conectividad</p>	<p>Dentro de los análisis en la reforma del modelo de protección se ha observado la necesidad de cualificar este tipo de medidas. Es así como se generará decreto de fondo de emergencia de acuerdo con sentencia CAJAR (párrafos 1050 a 1052). Pendiente y de reserva legal.</p> <p>Se reconocían las iniciativas humanitarias, pero ha habido un cambio con la nueva dirección de la OACP y la relación con la sociedad civil ha mermado.</p> <p>No se desarrollaron acciones en materia de conectividad para personas defensoras.</p>
6. Medidas administrativas para la seguridad territorial	<p>Prohibición de porte de armas</p> <p>Fortalecimiento personerías</p> <p>Reconocimiento formas de autoprotección</p>	<p>Continuación de la prohibición del porte.</p> <p>Está cursando un Proyecto de Ley para el tema de fortalecimiento de personerías. Este se encuentra en segundo debate en el Senado de la República. Se ha apoyado la iniciativa desde MinInterior.</p> <p>A través del Decreto 660 y el Banco de Proyectos se fortalecerán las iniciativas propias en materia de protección y autoprotección.</p> <p>De igual forma, se está generando el Programa de Protección especial para pueblos étnicos (Indicador CE9 del Acuerdo Final de Paz) que tiene dicha finalidad.</p>

Fuente: Dirección de Derechos Humanos.

Consideraciones sobre el impacto y obstáculos:

- Con la instalación de las múltiples instancias no se tiene un impacto inmediato en la disminución de agresiones. La multiplicidad de estas incide en la ineficacia del Estado.
- Algunas medidas consideradas de corto plazo no eran realmente así: la transformación policial, la derogación y elaboración de varios instrumentos normativos, la puesta en marcha del Decreto 660 y la definición de una sola ruta colectiva, entre otras, superan el plazo establecido.

- Tenía disposiciones que no podían desarrollarse: algunas de las funciones de los PMUV sobre priorización en el Decreto 660 y el PIGMLD no eran técnica ni normativamente procedentes.
- Hubo deficiencias en materia de seguimiento de compromisos en el marco de los PMUV.
- Existieron debilidades de articulación para generar respuestas acordes al plan: caso MinTic y obstáculo con entes de control y Fiscalía.
- Existió ausencia de comunicación y publicidad de avances a la sociedad civil.
- No obstante, el plan dio pie a múltiples avances significativos, como: i. la discusión de la política pública de garantías; ii. el desarrollo de un modelo de protección para personas firmantes; iii. el impulso inicial de instancias derivadas del AFP; iv. la reconducción de la noción de seguridad humana bajo los términos del Acuerdo; y v. el impulso y desarrollo de programas con retrasos históricos en materia de implementación.
- Es necesario trascender al Plan, la naturaleza de muchas de sus acciones o la forma en cómo fue formulado implica que ya se acabó o que hacen parte de planes o acciones de más largo plazo y estructurales.
- Todos estos cambios estructurales se están impulsando actualmente. En particular es central la Política Pública de Derechos Humanos para la Paz Total. Se proyecta un primer borrador de plan de acción de la Política Pública de Garantías para el 16 de agosto de 2024 (fecha de entrega de la Corte del Plan ordenado en la Sentencia SU 546 de 2023, las cuales se unifican para dar una mejor respuesta). A su vez, se ha avanzado de manera decisiva en el instrumento de racionalización de escenarios de prevención para hacer más efectiva la acción del Estado y se ha iniciado la discusión interinstitucional sobre la propuesta de reforma al modelo de protección.
- Se han dado incluso avances fuera del Plan, como lo es la actual construcción e impulso del Programa de Fortalecimiento de los Sistemas Propios de Protección para las comunidades étnicas (Indicador CE9). Un incumplimiento histórico del Acuerdo Final de Paz, que el Ministerio del Interior está materializando actualmente.
- Todo lo anterior tiene el objetivo de establecer un sistema de garantías a las personas defensoras, organizaciones y comunidades que cumpla el Acuerdo, atienda a diferentes órdenes judiciales y cuente con legitimidad de la sociedad civil (con procesos participativos).

B. COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA LA RESPUESTA RÁPIDA

El Decreto 2124 de 2017 reglamenta el Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida⁴ frente a la presencia, acciones y/o actividades de las organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan en riesgo los derechos de la población y la implementación del Acuerdo Final. En virtud del aludido Decreto, se establece que la

⁴El Sistema está compuesto por: (i) Alerta Temprana, emitida de manera autónoma por la Defensoría del Pueblo; (ii) Respuesta Rápida, que realiza la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida en conjunto; y (iii) Seguimiento al avance en la implementación de las recomendaciones.

Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida (CIPRAT)⁵ es la encargada de articular las acciones de prevención, atención y seguimiento a las situaciones de riesgo enunciadas en las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.

La Secretaría Técnica de la CIPRAT, en cabeza del Ministerio del Interior, cumple la función de recopilar, procesar, analizar, recomendar, articular y hacer seguimiento a dicha alertas tempranas, teniendo en cuenta a su vez las informaciones recibidas por múltiples fuentes.

En el marco del procedimiento establecido para dar cumplimiento a dicha función, el aludido Decreto prevé que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la emisión de la Alerta Temprana, se realiza seguimiento a las medidas adoptadas y coordinar las medidas complementarias necesarias de acuerdo con cada situación, las cuales son comunicadas en los diez (10) días hábiles siguientes por la Secretaría Técnica (Ministerio del Interior).⁶

Así mismo, la normativa contempla un segundo momento que corresponde al término de nueve (9) meses para realizar la evaluación periódica de las gestiones y acciones que cada entidad pertinente ha realizado como respuesta institucional a las situaciones de riesgo advertidas. De esta forma, el Ministerio del Interior convoca a sesión de seguimiento en terreno y/o a través de videoconferencia.

De acuerdo con su solicitud, nos permitimos remitirle el siguiente cuadro con la información requerida y mencionada en precedencia, donde se relacionan las acciones desplegadas por la secretaria técnica de la CIPRAT de acuerdo con las competencias que le concede el Decreto 2124 de 2017 con relación a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, con las respectivas fechas de seguimiento de la CIPRAT, así:

Sesiones CIPRAT. Alertas Tempranas 2022 -2023

No.	Alerta Temprana	Departamento	Municipios	Fecha emisión	Fecha de sesión
-----	-----------------	--------------	------------	---------------	-----------------

⁵Se encuentra conformada por las siguientes entidades del orden nacional: (i) Ministerio del Interior. (ii) Ministerio de Defensa, (iii) Policía Nacional, (iv) Comando General de las Fuerzas Militares, (v) Unidad Nacional de Protección (UNP) y (vi) Unidad para las Víctimas (UARIV) con carácter permanente.

⁶ Primer momento: (i) La Alerta Temprana se recibe mediante correo electrónico: secretariaciprat@mininterior.gov.co; (ii) la Secretaría Técnica remite de manera inmediata la Alerta Temprana, vía correo electrónico, a las entidades territoriales y nacionales competentes identificados por la situación de riesgo, gestionando los peligros y la coordinación interinstitucional pertinente; (iii) se verifica si en la Alerta Temprana se encuentran municipios priorizados en Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en caso positivo, se le informa a la autoridad territorial, la necesidad de crear el Comité Territorial de Alertas para la Reacción Rápida, brindando asesoría técnica sobre su conformación; (iv) Luego, dentro de los siguientes diez (10) días calendario siguientes, se convoca a sesión de seguimiento en el territorio que tiene la situación de riesgo; (v) resultado de esta, la Secretaría Técnica elabora y entrega el acta de la sesión, en donde se consignan las recomendaciones ajustadas a las acciones adelantadas en el marco del seguimiento a la situación de riesgo identificada; finalmente, (vi) se sistematiza en la matriz de seguimiento todas las recomendaciones emitidas.

1	AT 001-22	Valle	Cali	01/01/2022	21/01/2022
2	AT 002-22	Putumayo	Puerto Leguizamo	25/01/2022	3/02/2022
3	AT 005-22 D.C.	Bogotá	Bogotá	24/02/2022	10/03/2022
		Cundinamarca	Granada		
			Silvania		
			Fusagasugá		
			Viotá		
			Tibacuy		
			Pasca		
			Arbeláez		
			Pandi		
			San Bernardo		
			Venecia		
			Cabrera		
		Tolima	Icononzo		
4	AT 011-22	Caquetá	La Montañita	02/05/2022	16/05/2022
			Solano		
			Cartagena del Chairá		
			Paujil		
5	AT 016-22	Tolima	Planadas	30/06/2022	8/07/2022
			Ataco		
			Chaparral		
			Rioblanco		
6	AT 020-22	Cauca	Almaguer	18/08/2022	25/08/2022
			Bolívar		
			Sucre		
7	AT 023-22	Antioquia	Amalfi	02/09/2022	17/09/2022
			Anorí		
			Remedios		
			Segovia		
			Vegachí		
8	AT 024-22	Vaupés	Mitú	06/09/2022	20/09/2022
			Carurú		
9	AT 025-22	Huila	Nátaga	12/09/2022	22/09/2022
			La Plata		
			Paicol		
10	AT 029-22	Atlántico	Baranoa	27/10/2022	4/11/2022
			Palonuevo		
			Luruaco		
			Sabanalarga		
			Repelón		
11	AT 030-22	Nariño	Barbacoas	15/11/2022	25/11/2022
			Magüí Payán		
			Roberto Payán		
12	AT 031-22	Nariño	Santa Bárbara de Iscuandé	29/11/2022	7/12/2022
13	AT 033-22	Bolívar	Carmen de Bolívar	06/12/2022	20/12/2022
			Marialabaja		
			San Juan Nepomuceno		
			San Jacinto		
			Córdoba		
			El Guamo		
			Zambrano		
		Sucre	Ovejas		
			Chalán		
			Colosó		
			Morroa		
			Los Palmitos		
			San Onofre		
			San Antonio de Palmito		
			Tolúviejo		
14	AT 005-23	Cauca	Toribio	22/02/2023	7/03/2023
15	AT 007-23	Cauca	Cajibío	02/03/2023	7/03/2023

16	AT 008-23	Cauca	Piamonte	07/03/2023	18/03/2023
			Ricaurte		
			Barbacoas		
			Tumaco		
			Ipiales		
		Putumayo	Cumbal		
			Orito		
			Puerto Caicedo		
			Villagarzón		
			Valle del Guamuez		
			San Miguel		
			Puerto Asís		
17	AT 009-23	Norte de Santander	Bucarasica	09/03/2023	15/03/2023
			Sardinata		
			El Zulia		
18	AT 010-23	Huila	Neiva	13/03/2023	24/03/2023
			Tello		
			Baraya		
19	AT 011-23	Arauca	Arauquita	30/03/2023	11/04/2023
			Fortul		
			Saravena		
			Tame		
20	AT 013-23	Chocó	Bagadó	03/04/2023	13/04/2023
21	AT 018-23	Caquetá	San Vicente del Caguán	18/05/2023	30/05/2023
22	AT 020-23	Chocó	Rio Iró	29/05/2023	13/06/2023
23	AT 023-23	Casanare	Aguazul	15/06/2023	22/06/2023
			Yopal		
62	AT 026-23	Norte de Santander	Abrego	29/06/2023	12/07/2023
63	AT 028-23	Santander	Rionegro	23/08/2023	31/08/2023
64	AT 029-23	Caquetá	Puerto Rico	23/08/2023	31/08/2023
24	AT 031-23	Cauca	Corinto	30/08/2023	13/09/2023
			Miranda		
		Valle	Pradera		
			Florida		
			Arenal		
25	AT 034-23	Bolívar	Cantagallo	28/09/2023	11/10/2023
			Morales		
			San Pablo		
			Santa Rosa del Sur		
			Simiti		
26	AT 039-23	Valle del Cauca	Buenaventura	05/12/2023	19/12/2023

Fuente: Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana y Gobierno

C. REACTIVACIÓN DEL PROCESO NACIONAL DE GARANTÍAS

El Proceso Nacional de Garantías Es un espacio de interlocución entre el Estado y la sociedad civil, con el acompañamiento de la comunidad internacional, sobre el tema de las Garantías para el ejercicio de la labor de defensa de derechos humanos. Es una instancia de diálogo político del más alto nivel, donde se acuerdan acciones, lineamientos de política, medidas concretas para enfrentar la persistente violencia contra las personas defensoras y las lideresas y los líderes en Colombia. Este proceso busca:

1. Establecer un diálogo sobre la necesidad de garantías para las organizaciones sociales y de derechos humanos con el fin de adoptar las decisiones que se consideren.

2. Fortalecer el proceso de interlocución, nacional y territorialmente, para generar mayores niveles de confianza entre las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades del Estado.
3. Avanzar en la construcción de acuerdos, compromisos y rutas para generar medidas que creen un ambiente propicio para las actividades de defensa de los derechos humanos.
4. Hacer seguimiento a los compromisos que se adopten nacional y territorialmente en el tema de garantías

Mesa Territorial de Garantías: Es un espacio de alto nivel liderado por el Ministerio del Interior, en el cual voceros de la sociedad civil se reúnen con las cabezas de las instituciones gubernamentales para acordar estrategias, acciones y medidas que contribuyan a solucionar la grave situación nacional sobre las violaciones a los derechos humanos de las personas defensoras. Este espacio cuenta con la participación del pleno de los actores enunciados anteriormente, siendo presidido por el Ministro del Interior y la Secretaría Técnica, quien coordina el desarrollo de la agenda. Las Mesas pueden tratar temas como la situación general, temáticas para profundizar en algún aspecto en particular, de seguimiento a los compromisos previamente adquiridos, o con cualquier otro formato que se acuerde previamente. Dentro de sus funciones se encuentra:

1. Evaluar la situación de las personas defensoras de derechos humanos en cada región.
2. Construir confianza entre las autoridades locales y departamentales y la sociedad civil.
3. Identificar acciones, lograr acuerdos, adoptar medidas concretas y fijar una agenda de trabajo propia para garantizar el ejercicio de defensa de derechos humanos en cada región.

Igualmente, conforme a lo señalado en el Decreto 2124 de 2017, una vez recibida una Alerta Temprana, esta es puesta en conocimiento el mismo día de su emisión a las autoridades nacionales, departamentales y municipales objeto de recomendaciones dentro de las Alertas Tempranas.

De esta manera, se ha garantizado la activación de las distintas rutas institucionales de seguridad, prevención, protección, atención integral a las víctimas, así como el impulso en los avances de investigación judicial para identificar, judicializar y capturar a los distintos actores armados generadores de violencia, riesgos y amenazas, mediante una acción interinstitucional e interagencial de las entidades del Estado colombiano, tanto del orden nacional, departamental y municipal, concernidas con recomendaciones en las respectivas Alertas Tempranas.

**3. ¿En qué municipios hacen presencia los grupos armados ilegales?
¿Desglosar por grupo armado y municipios?**

Desde Ministerio, se aclara, respecto al interrogante sobre los municipios en los que hacen presencia los grupos armados ilegales, que en esta Cartera no reposa información para atender la solicitud planteada. Sin embargo, entendiendo la importancia del tema planteado, el Ministerio del Interior realizó traslado por competencia, a través de oficio con radicado No. 2023-2-003201-038617, al Ministerio de Defensa Nacional para que se brinde respuesta de fondo.

4. ¿Qué acciones se han realizado por riesgos y amenazas reportados en las Alertas Tempranas emitidas por el SAT de la Defensoría del Pueblo durante los años 2022 y 2023? Señalar la Alerta Temprana, población objeto, fecha, municipio y acciones de seguimiento.

Las acciones adelantadas por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, frente a las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, y en el marco de las cuales tenemos participación, son las siguientes:

AT 022-23 – Atlántico
Municipios: Barranquilla, Galapa, Malambo, Puerto Colombia, Soledad.
Recomendación 11: Al Ministerio del Interior, como líder del Proceso Nacional de Garantías, en coordinación con la Gobernación del Atlántico, recomienda adelantar las acciones pertinentes para reactivar y/o dinamizar la Mesa Territorial de Garantías y brindar la orientación técnica para la conformación y operatividad de los subgrupos de trabajo en los temas de prevención- protección, investigación, mujer y género, y una Comisión de Seguimiento Territorial, así como definir la periodicidad de las sesiones de la Mesa, de conformidad con la Resolución 074 de 2020 y la jurisprudencia desarrollada en la materia.
ACCIÓN: El equipo de defensores de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, adelantó la instalación de la Mesa Territorial de Garantías del departamento de Atlántico (31/03/2023). Así mismo, ha precedido tres (03) sesiones de la Mesa Territorial de Garantías, en las cuales se ha reiterado todos los esfuerzos por la protección y promoción de la defensa de los derechos humanos, de los ciudadanos y ciudadanas con actividad de liderazgo y defensa de los derechos humanos.
De igual manera, se adelantó una (1) sesión del grupo de apoyo (17/10/2023), una (1) sesión Comité de impulso (23/11/23) y una sesión del grupo de ayuda (20/03/2024). La próxima sesión de la MTG es en agosto de 2024.

AT 032-23- Cesar
Municipio: Valledupar

Recomendación: Al Ministerio del Interior como líder del Proceso Nacional de Garantías, en coordinación con la Gobernación del Cesar, recomienda adelantar las acciones pertinentes para sesionar en el inmediato plazo posible la Mesa Territorial de Garantías del Cesar y se incluya como tema prioritario esta Alerta Temprana de Inminencia con ocasión al escenario de riesgo aquí esbozado.

ACCIÓN: La gobernación emite el Decreto 044/2023, por medio del cual se crea la Mesa Territorial de Garantías de Cesar. El 17 de mayo de 2023, la Gobernación convocó una reunión con el objetivo acordar una hoja de ruta para la instalación. Se llevó a cabo convocatoria a las organizaciones de sociedad civil a un espacio autónomo para la elección de representantes al grupo de apoyo; la convocatoria al grupo de apoyo; la realización de un espacio autónomo previo a la instalación.

En la reunión participó un funcionario de la Dirección de DDHH del Ministerio del Interior, a quien la gobernación le solicitó informar al Ministerio sobre la emisión de una directriz que presente los lineamientos para la instalación y operatividad de la MTG.

Se realizó un acercamiento inicial con las plataformas de DDHH y se solicitó revisión del decreto.

Finalmente, se tiene programada de manera tentativa la Instalación de la Mesa Territorial de Garantías Cesar en el mes de septiembre de 2024.

AT 034-23- Bolívar

Municipios: Arenal, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simiti, Cantagallo, Morales.

Recomendación No. 13: se recomendó a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales y al Ministerio del Interior que en el marco del CONPES 4063 de 2021, socialicen con las empresas y entidades de los municipios de San Pablo, Cantagallo, Simití, Santa Rosa del Sur, Morales y Arenal la ruta de protección y prevención para el respeto y garantía de la labor de defensa de los derechos humanos.

ACCIÓN: En relación con este punto, es preciso indicar que las acciones emprendidas por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior corresponden a las líneas estratégicas establecidas en el CONPES 4063 "*Política Pública de Garantías y Respeto a la Labor de Defensa de los Derechos Humanos y el Liderazgo Social*" y el Proceso de Concertación de la Política Pública Integral de Garantías.

El objetivo de este proceso de concertación es propiciar una amplia deliberación social y política en el país para la construcción, adopción, implementación y seguimiento participativo, incluyente y concertado para la construcción de la Política Pública Integral de Garantías para la labor de defensa de los Derechos Humanos (PPIGLDDH) en Colombia.

Con relación a este aspecto, se hace necesario indicar que se tiene programado en el segundo semestre del 2024 validar, aprobar y adoptar la Política Pública Integral de Garantías de la Labor de Defensa de Derechos Humanos y su plan de atención integral

éste como instrumento de planeación estratégica para la operativización de la política pública.

AT 019-23- Nacional

Municipios: N/A

Recomendación No. 59: Impulsar, mantener y fortalecer técnica y en lo posible financieramente el Proceso Nacional de Garantías (MNG) y sus Mesas Territoriales, debido a su importancia como instancias de diálogo tripartito y de construcción colectiva en las regiones, entre organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos, organismos internacionales, así como con autoridades del orden gubernamental, de control y judicial nacionales y territoriales. Para ello, se sugiere: (1) oficializar la existencia del proceso, su estructura, naturaleza y objetivos, mediante un Decreto que le dé un espacio institucional dentro del Ministerio y oriente acciones a su instalación y sesión periódica en los 32 departamentos del país; (2) Realizar una valoración y diagnóstico conjunto con las plataformas de derechos humanos a la fecha, respecto a las principales falencias y aciertos de la ejecución actual de políticas y actuaciones estatales en los temas medulares de la mesa PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, INVESTIGACIÓN JUDICIAL, NO ESTIGMATIZACIÓN, Y ENFOQUE DIFERENCIAL DE GÉNERO; (3) Realizar de manera urgente una evaluación del Plan de Emergencia en el marco de la Mesa Nacional de Garantías, en el que se verifique el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en los Puestos de Mando Unificados por la Vida, con el fin de coadyuvar en la construcción y adopción de una Política Nacional de Garantías para personas defensoras; (4) Llevar a cabo la vinculación de la Procuraduría General de la Nación en el proceso de seguimiento de los acuerdos y compromisos derivados de las mesas territoriales. Para esto, es importante conformar y dinamizar la Comisión de Seguimiento del Proceso Nacional de Garantías

ACCIÓN: El equipo de defensores de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior viene adelantando acciones dirigidas a la construcción de escenarios de concertación para la modificación del CONPES 4063 y la concertación de una nueva Política Pública integral de Garantías para la labor de defensa de los derechos humanos de manera articulada con las diferentes plataformas defensoras de derechos humanos.

A la fecha del mes de julio de 2024, se han realizado nueve (9) encuentros regionales a saber: Caribe, Magdalena Medio, Centro Sur, Pacífico, Nororiente, Antioquia y Eje Cafetero, Llanos, Amazonia y Centro, Suroccidente y Chocó, los cuales se llevaron a cabo entre el segundo semestre del año 2023 y primer semestre del año 2024.

Igualmente, se ha venido compilando información sobre las diferentes acciones y compromisos adquiridos en los territorios para evaluar la situación actual y real de los municipios mencionados en la AT con el fin de viabilizar las acciones a realizar.

Sumado a ello, en relación con la instalación y activación de las Mesas Territoriales de Garantías, a la fecha, contamos con las siguientes:

- Atlántico, instalada el 31 de marzo de 2023
- Bogotá, instalada el 04 de julio de 2024.
- Magdalena, instalada el 04 de diciembre de 2023.
- Arauca, instalada en el mes de marzo de 2024.
- Sucre, instalada el 09 de mayo de 2024.
- Casanare, instalada el 31 de mayo de 2024.
- Boyacá, a instalarse en el mes de agosto 2024.
- Cundinamarca, a instalarse en el mes de agosto 2024.
- Magdalena Medio, a instalarse en el mes de agosto 2024.
- Huila, a instalarse en el mes de agosto 2024.
- Caldas, a instalarse en el mes de agosto 2024.
- Tolima, a instalarse en el mes de agosto 2024.
- Caquetá, a instalarse en el mes de agosto 2024.
- La Guajira, a instalarse en el mes de agosto 2024.
- Bolívar, a instalarse en el mes de agosto 2024.

De la misma manera, el 11 de julio de 2024 la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, realizó la primera sesión de la Mesa Nacional de Garantías, el espacio de más alto nivel que organiza diferentes entidades del orden nacional para trazar rutas concretas hacia la protección de la vida, la integridad y la seguridad de las personas líderes(as) y defensoras de derechos humanos.

Por otra parte, para el caso de las mesas que se encuentran instaladas como Antioquia, Chocó, Córdoba, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander y Valle del Cauca, vienen siendo acompañadas e impulsadas por la Dirección de Derechos Humanos con el fin de lograr articular acciones institucionales que garanticen el ejercicio y la labor de la defensa de los derechos humanos.

Finalmente, con relación a las mesas que no se encuentran en este listado y que faltan por instalar, es preciso indicar que esta Cartera se encuentra en etapa de acercamiento con las nuevas entidades territoriales y organizaciones sociales para efectos de lograr su instalación.

AT 019-23- Nacional

Municipios: N/A

Recomendación No. 64: Valorar e implementar acciones tendientes a disminuir los niveles de subregistro de conductas vulneratorias, hechos victimizantes, o delitos contra personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, sus organizaciones y colectivos.

ACCIÓN: El equipo de defensores, en articulación con el Programa Integral de Garantías de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, viene adelantando acciones encaminadas a realizar una valoración de los subregistros, que permita comprender de manera detallada dicho panorama. A partir de dicho insumo, se espera implementar una Ruta Interinstitucional para optimizar los procesos de registro y atención de denuncias de conductas vulneradoras, hechos victimizantes, o delitos contra personas

defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, sus organizaciones y colectivos.

Respetada secretaria, en los anteriores términos, este Ministerio, en aras de garantizar una respuesta eficaz y de fondo, da por resueltos los interrogantes planteados y se suscribe atento a cualquier requerimiento que en función de la labor congresional se solicite a esta cartera.

Cordialmente,



KEVIN FERNANDO HENAO MARTÍNEZ
Director de Asuntos Legislativos
Ministerio del Interior

Proyectó: Dirección de Derechos Humanos; Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana y Gobierno

Consolidó: Adelaida Moya – Profesional DAL

Revisó: Manuel Felipe Díaz - Contratista DAL 

Anexos:

- Anexo 1 - Resolución 0968 31 de mayo 2022 acreditación promotores
- Anexo 2 - Resolución No. 1746 del 21 de septiembre de 2022
- Anexo 3 - Traslado por competencia UNP - Proposición No 8 - Id 179308
- Anexo 4 - Traslado MinDefensa - Proposición No 8 - Id 179308